

Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan sin novedad en esta Corte en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 542.

Han llamado vivamente la atención de este Gobierno de provincia las repetidas quejas presentadas en el mismo de varios interesados á quienes, bajo pretexto mas ó menos plausible de la apertura ó ensanche de caminos vecinales, se les ha expropiado por los respectivos Alcaldes de fincas rústicas de que eran poseedores, sin mediar para ello la declaración de utilidad pública de las obras, las formalidades y expediente consiguientes, y principalmente la indemnización previa que determinan las leyes. Tan gravísimos abusos, atentatorios al derecho sagrado de propiedad, uno de los fundamentos en que descansa toda sociedad bien organizada, no pueden pasar desapercibidos á este Gobierno ni excusarse de manera alguna; porque ni aun el celo por el servicio público puede liberar á los Alcaldes de la responsabilidad en que incurren, supuesto que pueden ejercer su influjo dentro de la órbita legal sin herir respetabilísimos inte-

reses cuya custodia les está encomendada en primer término en sus respectivas jurisdicciones. Por tanto, he resuelto dirigirme á los Alcaldes en esta ocasión importante, prohibiéndoles llevar á efecto expropiación de ningún género sin conocimiento de este Gobierno; en la inteligencia de que estoy resuelto á castigar severamente y entregar á los tribunales á los que no presten á la propiedad particular la protección y el respeto que las leyes le garantizan. De haberse enterado de esta circular y de haberla expuesta al público, darán los Alcaldes aviso á este Gobierno en el término de ocho días. Orense 15 de octubre de 1858.
—El Gobernador, Hermenegildo Guitian.

Número 543.

No habiéndose publicado oportunamente en el Boletín oficial de la provincia, y siendo de aplicación inmediata á la presente rectificación de listas electorales de Diputados á Cortes, he dispuesto se inserte en dicho periódico la Real orden siguiente:

«Ministerio de la Gobernación del Reino.—Remitido á informe del Consejo Real el expediente instruido en este Ministerio con motivo de la determinación adoptada por ese Gobierno de provincia para completar la lista electoral de Verin que resultó con menos de ciento cincuenta electores, después de rectificada con vista de las resoluciones de la Audiencia de Galicia, dicho Cuerpo consultó: 1.º Que el art. 17 de la ley electoral está claro en su letra y en su espíritu, entendiendo que no es procedente su aplicación después de dictados los fallos de las Audiencias aun cuando

en virtud de las cuales quedara un distrito con menos número de ciento cincuenta electores: 2.º Que como consecuencia de esto, el Gobernador de Orense no pudo ultimar las listas electorales del distrito de Verin de la manera que lo verificó.— Remitido de nuevo este expediente á informe del Consejo Real, para que manifestase terminantemente si en su concepto era ó no posible remediar la falta cometida en la ultimación de las expresadas listas electorales, dicha Corporación consultó lo siguiente: El Consejo ha examinado la consulta que le ha sido dirigida por Real orden de 27 de febrero último, sobre si es ó no posible remediar la ilegalidad cometida en la ultimación de las listas electorales del distrito de Verin, en las cuales fueron incluidas nuevamente varias personas después de los fallos de la Audiencia territorial, interpretando equivocadamente el Gobernador el art. 17 de la ley electoral. El Consejo cree que dicha ley está clara y terminantemente en este particular. En su título 4.º marca las formalidades que son necesarias para la formación, rectificación y ultimación de las listas electorales, deduciéndose de la letra y del espíritu de sus disposiciones, que los electores para que adquieran este derecho han de sufrir precisamente el juicio contradictorio que la ley tiene establecido, lo cual terminantemente consignó el Consejo en su anterior informe. Bajo este supuesto, cualquiera persona que sea incluida en las listas sin este requisito, debe ser eliminada de ellas, porque los electores lo son por derecho propio y ministerio de la ley en virtud de los requisitos de que se hallan adornados; así que la inscripción en las listas no confiere por si el derecho electoral si no se han observado las formalidades al efecto establecidas. Si pues el Gobernador de Orense incluyó ilegalmente en las listas, al ultimarse, á personas que no han sufrido la con-

tradicción de su aptitud legal, este acto debe considerarse como si no hubiera existido, é ineficaz por consiguiente la inclusión de personas que llevó á cabo, declarándose ultimadas las listas conforme á lo que resultó de la sentencia de la Audiencia territorial. No se opone á ello en nada el art. 35 de la ley, que no permite alterar por ningún motivo los trámites y plazos señalados para la formación, rectificación y ultimación de las listas, puesto que no se trata ahora de alterar en nada estos plazos, sino de dar cumplimiento á la ley y de subsanar una ilegalidad, opina puede V. E. servirse consultar á S. M., que las personas indebidamente inscritas en las listas electorales del distrito de Verin, deben eliminarse de ellas como si no estuvieran inscritas, por la nulidad de su inclusión, sin necesidad de que nuevamente hayan de publicarse las listas con el carácter de ultimadas, puesto que ya se cumplió con este requisito en tiempo hábil, y esta eliminación no es una rectificación en el sentido legal de la palabra.»

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por el Consejo, lo comunicó á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de mayo de 1858.—Fernando de la Hoz.—Sr. Gobernador de la provincia de Orense.

Orense 14 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitian.

Número 544.

En la Gaceta núm. 278 del martes 5 del actual se lee lo siguiente:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN A S. M.

SEÑORA: La Comisión de Estadística general, cuya presidencia me está en-

comendada, ha terminado sus operaciones. Señala al Censo de población de España. Sí, Señor, el resultado que tengo la honra de presentar a V. M. de aquellos en que cabe la seguridad de una exactitud completa: en estas materias no se adquiere posesión sino con el tiempo, ni se adelanta, sino con la perseverancia, ni se depura la verdad sino con las comprobaciones, más en la urgencia de satisfacer una necesidad universalmente reconocida. V. M., que sabe apreciar la trascendencia del primer paso, se dignó dar la señal, y el recuento general de habitantes se verificó el 24 de mayo del año anterior, llevándose más operaciones consiguientes en términos de ofrecer hoy una de las páginas gloriosas del reinado, en que tantas obras grandes se emprenden y tantos manantiales de prosperidad pública se desobstruyen.

Los datos estadísticos, que lo mismo arrejan luz para la gobernación del Estado desde la altura del legislador hasta las más minuciosas operaciones administrativas, que para el desarrollo de la industria privada en el vasto ámbito de la producción y el consumo, habían de tener su principio y base en el conocimiento de la población. Esto se ha conseguido de una manera tan satisfactoria como podía esperarse de una generación no acostumbrada ni preparada, quedando creado para todos el compromiso de no retroceder, de no detenerse, de aspirar a sucesivas mejoras y de mantener constantemente el Censo a la altura de indicador fiel del primer elemento de la fuerza, riqueza y poderío de la nación española.

La distribución de los habitantes por el territorio de la Monarquía aparece del *Nomenclátor*, impreso por separado. Tanto la concentración como la diseminación de los albergues y puntos habitados, se explica en parte por las condiciones naturales del suelo y clima, pero mucho hay también que interrogar a la historia de largos períodos de guerras y turbaciones, en que el asiento y modo de existir de los pueblos se subordinaban a la mira principal de la defensa contra los medios contemporáneos de ataque. En cuánto al número de habitantes en relación con el territorio de cada provincia o comarca, otras causas concurren a determinar su razón de ser y el porvenir que se les ofrece, según que la acción individual, en su tendencia a la expansión y a las mejoras, sea más o menos favorecida por una legislación liberal y paternal. Unas localidades de la Península abundan de brazos, hasta el punto de exigir cuidados si no de inspirar inquietud, al paso que otras están deshabitadas brindando riqueza a la perfección del cultivo y al ejercicio de toda industria. Digno estudio y noble tarea al filósofo, al gobernante, al economista y a todo amante de su patria, que no puede menos de considerar a una población aplacada, religiosa y satisfecha, como la expresión del progreso moral y material; que es, llamado el hombre solido la tierra, y para nosotros como el resorte irresistible que ha de devolver a España su crédito entre los pueblos y su importancia entre las potencias.

El incremento de la población española desde el advenimiento de la excesiva casa de Borbón señala una época, cuya marcha se acelera en nuestros días por las aplicaciones de las ciencias, por el espíritu emprendedor que se propaga, por la facilidad que alcanzan las comunicaciones y por la hora que se dispone al trabajo. Este movimiento tiene sus leyes, y necesita prepararse sin precipitación, ilustrarse sin excusiones, guiarla sin violencia. La especulación, espontánea, no cruza de ferro-carriles los parámetros, ni tiende la vista tan lejos como los Gobiernos previsores atentos a los grandes intereses del país en la sucesión de los siglos, y encargados de promover el desenvolvimiento de todos y cada uno de los recursos que la naturaleza tiene reservados, para que sigan su

curso providencial y sean en su dia la felicidad y no la perturbación de las generaciones.

Los datos contenidos en el Censo y el *Nomenclátor* se prestan a comparaciones y deducciones varias. Entran en el amplio dominio de la generalidad. El Presidente del Consejo se limitará, por lo mismo, a exponer brevemente el método que se ha seguido en este trabajo, para que el público infiera el grado de certidumbre que le asiste, la fe que merece y la confianza que puede inspirar.

En 14 de marzo del año anterior se sirvió V. M. decretar la formación del Censo general de la población de España e Islas Baleares y Canarias, por empadronamiento nominal y simultáneo de los habitantes, así nacionales como extranjeros. Con las cédulas de inscripción individual habían de formarse padrones, de pueblos con ellos, resúmenes de partido judicial, y con estos resúmenes de provincia. Una instrucción minuciosa determinaba los medios de ejecución, creando Juntas que tanto en los pueblos como en los partidos y las provincias, dirigiesen y cuidasen las operaciones bajo la presidencia de la Autoridad, especificando la forma de la inscripción, arreglando el examen y comprobación de las cédulas resultantes, y disponiendo las rectificaciones necesarias para depurar la verdad hasta donde dable fuese. Todas las formalidades se han llenado en las poblaciones, desde la más numerosa a la más reducida, y los resúmenes de provincia se han completado con más o menos prontitud según las dificultades con que se luchaba y según el celo e inteligencia empleados en vencerlas.

La Comisión central ha reunido todos los datos; los ha examinado prolídicamente, resúmenes, memorias, y hasta las cédulas de inscripción vecinal de cada pueblo; ha puesto reparos donde procedían; ha promovido declaraciones; ha exigido rectificaciones, y solamente después de estar satisfecha en unos casos y de haber agotado en otros los recursos de que dispone, ha dado la última mano y convencido de que por ahora no puede irse más lejos.

En dos puntos se había fijado la Comisión desde un principio: en no pedir a los pueblos ni a los individuos más datos que los que convenientemente pudiesen suministrar sin confundirse, y en no adoptar inducciones ni apelar a arbitrios supletorios para computar lo que directamente había de averiguarse y contarse.

No basta ciertamente en un Censo el consignar la suma aritmética a que asciende la población, sino que importa clasificar las partes distintas que constituyen esta masa, señalar sus reciprocas relaciones, determinar sus movimientos y seguir las vicisitudes de su renovación sucesiva en sentidos de auge o decadencia. Pero en la práctica hay una regla de conducta trazada por el buen sentido, que es, no comprometer el éxito de las operaciones por pretender demasiado. En la clasificación de los habitantes, según sus profesiones y ocupaciones, se han experimentado tales tropiezos, ya por falta de costumbre, ya por la complicación resultante de figurar una misma persona repetidamente y por varios conceptos en las casillas de los padrones, que la Comisión temerosa de que se paralizase el servicio de muchas provincias con motivo de ocasión de las dudas en este particular ocurridas, hubo de renunciar por ahora a semejante averiguación, después de reiterados e inútiles esfuerzos por obtenerla.

Igualmente ha sido preciso prescindir de apurar el domicilio legal de cada uno de los habitantes. Reconocida la inscripción general y simultánea como el mejor sistema de empadronamiento para aspirar a la exactitud numérica, sucede que la población transiente y la propiamente flotante se inscriben y abultan donde no les corresponde por título de vecindad, engañándose, para evitar o disminuir confusiones, el aumento de una casilla en las cédulas de inscripción donde apuntar los

vecinos e individuos del pueblo temporalmente ausentes, en contraposición de la de los foráneos, ya accidental, ya indefinidamente presentes, pero no establecidos. La Comisión se ha resignado a mayor simplificación, no solo por asegurar el cumplimiento de lo llano y hacedero, sino también porque la confrontación anterior de todos los datos que harían de cruzarse en la vastísima red de los pueblos, crearía un trabajo improbo si se tratase de una demostración suficiente a hacer resaltar a todas luces la realidad.

Esta declaración es importante, pues mientras que en muchas poblaciones viene a equilibrarse los ausentes con los enclaves transeuntes, en algunas otras aparece una gran desproporción, como en Ronda y Baeza, que al tiempo de la inscripción celebraban ó iban a celebrar sus ferias; en los baños de Archena; Busot, y otros, que entonces estaban abiertos y concurridos, y en varias localidades fronterizas a Portugal y Francia, cuyos habitantes transitan estacionalmente en busca de jornal ó en ocupaciones de tránsito. El Censo, pues, formado por la Comisión no es completo, porque no consiste en el padron general de los españoles con especificación de su domicilio de derecho únicamente contiene el domicilio de hecho en un día dado. La diferencia, no es tan sensible en nuestro país como en otros donde más se viaja, pero siempre existe ese vacío; que conviene señalar para que se llene en ulteriores operaciones estadísticas, susceptibles de mayor perfección.

Cuando resolvió la Comisión no admitir otro criterio para conocer la población que el contarla, ni otra manera de cerciorarse de la extensión del territorio que medirlo, no hizo mas que seguir los consejos de la razón, confirmados por la experiencia. Estudiar un hecho, numérico y luego, generalizarlo por medio de una multiplicación, aun cuando se presuman o divisen analogías; es un procedimiento hipotético que debe conducir al error; y el partir de datos accesorios, oblicuos y no siempre averiguados, para hacer suposiciones y cálculos en ramos heterogéneos o inconexos, con pretensiones de seguridad, es, llevar el método inductivo y conjectural muy abajo por la pendiente del descrédito. La Comisión no podía emplear mas que el método natural y expositivo, que sin salir del orden experimental, cuenta y mide, suma y resta, el mas largo, el más penoso de todos, pero también el único seguro.

Una vez anunciado el recuento de la población, la mayoría de las provincias acogió favorablemente el pensamiento, distinguiéndose las Baleares, Cádiz, Canarias, Almería, Sevilla, Coruña, Alava, Guipúzcoa, Ávila y Pontevedra. A pesar de la tradicional prudencia, de que todavía se han advertido algunos resabios, e instintiva repugnancia de los pueblos a investigaciones de toda especie por recelo de vejámenes y nuevos impuestos, la sensatez pública reconoció en general las ventajas que podría traer esta operación, aun en el sentido de ayudar con el tiempo a una equitativa igualación del asiento y reparto de las contribuciones. Muchas Juntas de provincia, de partido y de pueblo han trabajado con celo y actividad; el Clero ha cooperado con benevolencia, y sería imposible enumerar a tantos dignos españoles, como espontáneamente han prestado servicios importantes con sus fuerzas, con su asistencia personal y con sus exaltaciones, hijas del más ascendido patriotismo y de la más pura intención. En las poblaciones pequeñas se ha encontrado ordinariamente más sinceridad que inteligencia; en las grandes se ha echado de ver menos fervor, y no siempre bastante ordenamiento; y en la clase de las medianas es donde recae mayor sospecha de casos de ocultación intencional y maliciosa porque el interés les avisa y recuerda que al crecimiento sigue la elevación de categorías, con aumento de cotas en el pago de ciertos impuestos y cargas.

En la Gaceta del 7 de setiembre se insertó un tapetón Gayane de la población, según el resultado de las cédulas de inscripción recogidas, y primeras noticias suministradas por los Gobernadores. Vinieron luego las operaciones de comprobación y rectificación; se publicaron los resúmenes por partido en los Boletines oficiales, se invitó a los individuos y a los pueblos a reclamar de agravios, como a denunciar ocultaciones, y por espacio de algunos meses se practicaron diligencias variadas, hasta que empezaron a dar por terminados éste remitiendo a la Comisión central sus trabajos. Albacete, Logroño, Guadalajara, Alava, Cuenca, Huelva, Huesca, Toledo, Navarra, y sucesivamente las demás provincias. El Presidente del Consejo, que tiene la conciencia de que se ha hecho cuanto era posible, presenta sumisamente a la aprobación de V. M. el Censo definitivo y oficial, con la clasificación de habitantes al tenor de las provincias, partidos judiciales y Ayuntamientos, por naturaleza, por sexo, por estado civil y por edades. Acompañané un resumen general una tabla de las provincias y sus capitales por el orden de mayor población, y otra ordinal de las mismas provincias según su mayor extensión superficial y la densidad de la población respectiva.

El número de habitantes en la Península, Baleares y Canarias aparece de 15.464.340. La Comisión no está penetrada de la rigurosa precision de esta suma; piensa al contrario que debiera resultar mayor, tanto porque en provincias de población muy diseminada se necesita larga preparación para recoger datos exactos; al paso que en las de población agrupada no siempre se han contado bien los albergues destacados, cuanto porque varias causas reunidas de impericia, de incuria y de malicia, han debido obrar siempre en el sentido de la diminución y nunca en el del aumento sin que hayan podido emplearse medidas coercitivas bastante eficaces, ni repetirse las operaciones de un modo plenamente satisfactorio, ni menos ejecutarse por personas desinteresadas y de confianza la comprobación minuciosa é individual de las cédulas de inscripción habidas, y su comparación con las que debiera haber. De lo que está la comisión segura y de lo que responde, es de haber cumplido y hecho cumplir todos los trámites y formalidades del Real decreto e instrucción de 14 de marzo, y de no haber descuidado ninguno de los recursos que se hallan en cualquier concepto a su alcance. Al Censo le asiste el derecho de ser reputado verdadero en el orden legal, aun cuando no lo sea en el estricto orden material. A la perfección nunca se logró la Comisión de llegar en tan breve tiempo; y no tiene el menor inconveniente, si V. M. se digna permitíelo, en abrir sus libros y sus expedientes al público, para que los escritores, los economistas y los curiosos puedan cerciorarse de la asiduidad de los esfuerzos de la calidad de los datos y de la buena fe con que se exhiben y publican.

En el *Nomenclátor* resultan 48.220 localidades pobladas con mas de 12 habitantes, pudiendo graduarse en un número superior las alberguerías y caseríos de menor cuantía, puesto que en sola la provincia de la Coruña deben exceder de 15.000, según apreciación del Gobernador. En la formación del *Nomenclátor* de los pueblos, considerado puramente como un catálogo de personificación de entidades colectivas, apenas era de temer el interés de la ocultación, ni inspiraban desconfianza las noticias suministradas por los Alcaldes o las Juntas locales, que por otra parte habían de quitarles y autorizarse en la confrontación con los datos administrativos a la sazón existentes: la dificultad experimentada por la Comisión ha consistido en hacerse comprender y asistir. Es tanta la diversidad de nombres con que en España se han conocido las comarcas y circunscripciones territoriales, y tan diferente la inteligencia dada a un

mismo vocablo, que no han bastado definiciones ni prevenciones para establecer una regla general uniformemente aceptada y seguida. En unas partes, por ejemplo, *caserío* es un grupo pequeño de casas, mas ó menos en contacto, mientras que en otras significa precisamente una estancia ó casa solitaria y alejada de toda otra vivienda. Por *cortijada*, se entiende el grupo ó manzana formado por la proximidad de varias casas de labor de la clase de los cortijos, al paso que otras veces se aplica á un cortijo solo, aislado, y aun de escasa importancia.

En medio de ambigüedades, incoherencias y contradicciones, se ha considerado la Comisión en probar la clasificación de las localidades habilitadas, con arreglo al número de los respectivos moradores. En provincias de población agrupada en masas ha dejado figurar nominativamente en el Nomenclátor hasta los molinos y las ventas; en las de población diseminada no específica más que los parajes y entidades que reúnen de 50 habitantes para arriba, hasta el punto que lo ha consentido la forma en que vinieron los datos; acudiendo en los casos de inferior número á la designación sintética y genérica, á fin de no producir un libro sumamente voluminoso, ni dar mayor realce á la disparidad entre unas y otras provincias. En lo adelante podrá convenir otra manera de proceder, mas conforme á la realidad y significación de las cosas.

Al Nomenclátor acompaña un cuadro por provincias de clasificación gradual de los pueblos, según el número de sus habitantes.

Después de esta exposición de hechos y explicación de motivos, pudiera ponerse en paragon el Censo de España con el de otras naciones, bajo los diferentes aspectos que admite la descomposición ó estudio analítico de la población por sexos, por longevidad, por emigrantes, traseuntes y flotantes, por matrimonios &c. La Comisión central entrega su trabajo al examen y ulterior elaboración del público ilustrado, ya sea en sentido de mera curiosidad, ya en busca de deducciones útiles en la esfera del Gobierno, de la Administración, ó de la actividad social; sin perjuicio de consignar el resultado de sus propias observaciones en el Anuario que en breve se propone dar á luz. Lo que en este momento me cumple, Señora, es elevar á la excesiva consideración de V. M. la sumaria indicación de las consecuencias que naturalmente se derivan de la publicación del Censo oficial, así como la propuesta de las medidas que conviene adoptar para lo sucesivo.

El Censo debe producir en todos los ramos de la Administración pública el efecto de servir de regulador legal de la población, el de promover las reformas útiles que acuse la prudencia deducidas de los datos en el contenido, y el de estimular constantemente á la progresiva mejora de este importante trabajo.

Lo primero hará desaparecer los Censos que actualmente están rigiendo en España, el general de 1846 para aplicación de la ley electoral, el de 1850 que ha servido para las quintas, los que se usan en las dependencias de la Hacienda pública y la Marina, y los que con más ó menos periodicidad se arreglan en los Gobiernos provinciales, surgiendo una disonancia muy semejante á la anarquía. La sustitución no puede menos de ser ventajosa, ya porque introduce la uniformidad reconocida como necesaria, ya porque mucho adelanta en aproximación á la realidad. No se pierda, sin embargo, de vista que la ejecución accidental y momentáneamente acuerda, lada, como en los casos de ferias, fiestas, otros análogos, es completamente contraria al vecindario para levantar las casas públicas; ni se entienda que se trata de someter la Administración á la infalibilidad de los datos, no siempre exactos, ya que tenga por si misma medios de clasificar y depurar; sino que, al contrario, á todos importa, y corres-

pone buscar y emplear los recursos á cada cual, disponibles para alcanzar más positivos resultados, y compartirlos en beneficio común.

De lo segundo podrá tomar origen el estudio de una nueva división territorial por provincias y partidos, así como la reforma de la organización municipal en poblaciones de escaso vecindario. Aun se conservan ejemplares, y antes eran mucho más frecuentes, de pueblos como se vé en las provincias de Burgos y Córdoba, que en lo administrativo pertenecen á una provincia y en lo judicial á otra, y Ayuntamientos ó Concejos en Oviedo, que se fraccionan y corresponden á dos, y aun á tres, distintos partidos judiciales. Otros pueblos están situados á largísima distancia de la capital de la provincia ó del partido, y no pocos tienen constituido Ayuntamiento con número bastante inferior de habitantes al exigido por la ley, ya muy franca en este partido.

Finalmente, la obra emprendida necesita mejorarse. Despues de dos años de colera-morbo, cuyos estragos dejaron vacíos perceptibles en algunas provincias, y de dos grandes cambios políticos, cuyos vestigios en la agitación de los ánimos siempre tardan en desvanecerse, se hizo el recuento general de 21 de mayo de 1857, acrecentándose de este modo las dificultades que de suyo ofrece la operación. De esperar es que una época de tranquilidad no interrumpida venga á dilatarse en el fausto rejugado de V. M., y que en ella puedan las investigaciones estadísticas adquirir el sello de autenticidad que las ennoblecen, y producir los frutos de que son capaces. La Comisión central opina que el Censo debe rectificarse totalmente cada cinco años, y que desde luego conviene empezar repitiendo el recuento en el año de 1860, para utilizar la experiencia aforada, sin que se amortigüen las impresiones aun recientes respecto de las vicisitudes ocurridas, y de los elementos que hay que fomentar ó combatir.

Otra razón poderosa milita en favor de la pronta repetición del recuento ó empadronamiento general. Es demasiado cierto por desgracia, que las poblaciones ocultadoras salen beneficiadas en mas de un concepto, y no es de honrados el tolerar que la incuria, ó á veces la mala fe, obtengan un premio a expensas de la diligencia y la lealtad. Al efecto se necesita la intervención de la ley especial, que autorice los gastos, corrija la inobedience y castigue el fraude.

Para entonces habrán de figurar los habitantes transoceánicos de las Antillas, Filipinas, Marianas y Golfo de Guinea; se distinguirá el domicilio de hecho del de derecho, y se determinará el modo de seguir y consignar el movimiento de la población, mediante el registro civil convenientemente establecido. Una organización, tan eficaz como económica, del servicio general de Estadística, debe ser la clave de todo el sistema, para que el Censo actual, considerado como ensayo y punto de partida, llegue con el tiempo al grado de perfección apetecido, en utilidad del país y puro y duradero esplendor del Trono.

En virtud de lo expuesto, me cabe, Señora, la honra de someter, de acuerdo con el Consejo de Ministros, á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Real decreto.

Madrid 30 de setiembre de 1858.—SEÑORA.—A L. R. P. de V. M.—Leopoldo O'Donnell.

REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones que me han sido expuestas por el Presidente de mi Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.^o Conquiero mi Real aprobación al Censo de la población de España, formado por la Comisión de Estadística general, en consecuencia del empadronamiento de habitantes verificado el 21 de

mayo de 1857 en la Península, é Islas Baleares y Canarias.

Art. 2.^o Este Censo se publicará con carácter oficial, y servirá en todos los actos y para todos los usos de aplicación en los diferentes ramos de la Administración pública desde 1.^o de enero de 1859.

Art. 3.^o En el año de 1860 se repetirá el empadronamiento general de habitantes,

con inclusión de los de las provincias de América y Oceania é Islas del Golfo de Guinea, y sucesivamente se practicará igual operación cada cinco años.

Art. 4.^o En lo venidero se dará la posible amplitud a las clasificaciones del Censo, expresándose el domicilio real ó de hecho de los habitantes al verificarse el empadronamiento, y además su domicilio legal ó de derecho por razón de vecindad.

Art. 5.^o Se establecerá en la forma conveniente el registro civil, para que constantemente señale la alta y baja, ó sea el movimiento de la población.

Art. 6.^o Se presentará á las Cortes un proyecto de ley que autorice los gastos generales, provinciales y locales inherentes a las operaciones estadísticas, no solamente del Censo de población, sino también de la medición del territorio é inventario de la riqueza general, y que imponga penas proporcionadas á la inobedience y al fraude.

Art. 7.^o Se organizará el servicio general de Estadística de modo que pueda desempeñarse con regularidad, economía y buen éxito.

Art. 8.^o Las rectificaciones que se produzcan por el empadronamiento general que debe realizarse en 1860, y por los que se han de verificar sucesivamente cada cinco años, se publicarán para que obren sus efectos legales en el orden administrativo.

Con igual fin, siempre que cualquier ramo de la Administración lograse en fuerza de sus propios medios acreditar aumento ó diminución de población en una ó varias localidades, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Estadística general para su publicación como mejora del Censo.

Art. 9.^o Para ningún efecto administrativo se contará como población impunitable la afluencia momentánea de forasteros atraídos por ferias, baños ó fiestas, que respecto de localidades determinadas y conocidas viene anotada en el Censo con el carácter y en la casilla de los *transeuntes*.

Art. 10. Se darán en mi Real nombre las gracias á la Comisión de Estadística general, y á las Juntas de provincia, partido y Ayuntamiento, funcionarios públicos y personas particulares que mas se hayan distinguido por su desinteresado celo y eficaz concurso á las operaciones censales.

El Presidente de mi Consejo de Ministros me propondrá las recompensas á que se haya hecho acreedor el mérito extraordinario.

Art. 11. El Nomenclátor de los pueblos ordenado por la Comisión general se publicará al mismo tiempo que el Censo, y se rectificará en lo sucesivo en las épocas y forma que yo determinare.

Dado en Palacio á 30 de setiembre de 1858.—Está rubricado de la Real mano.

—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público. Orense 13 de octubre de 1858.—El Gobernador, Hermenegildo Guitian.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE ORENSE

No habiendo tenido efecto la subasta de arriendo del Portazgo de la villa de Laza procedente del secuestro de Monterrey, se anuncia la segunda licitación con rebaja de la 6.^a parte del tipo.

El remate se celebrará el dia 51 del corriente á las once de la mañana en el despacho del Sr. Gobernador civil de la provincia ante su autoridad, el Administrador de Propiedades y Escrivano del Juzgado de Hacienda; é igualmente se verificará en dicho dia y hora en la casa consistorial de Laza, ante el Alcalde, Procurador, síndico y fe de Escrivano, bajo el tipo de 1.500 rs. que resultan del año comienzo del último quinquenio, rebajada la 6.^a parte.

La licitación se verificará por medio de pliegos cerrados durante el término de media hora que tendrá este acto, estando de manifiesto la tarifa y pliego de condiciones que a continuación se inserta.

TARIFA

á que debe arreglarse el arrendatario para la recaudación de los derechos.

Por cada caballería de cualquiera clase, cargada ó descargada, cobrará 4 mrs. vn.

Por cada cabeza de ganado lanar, de cerda ó vacuno, idem 4 mrs. vn.

Modelo de proposición.

Don..... vecino de..... se compromete á llevar en arrendamiento el Portazgo de la villa de Laza, que figura en el presupuesto formado por la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado por la suma de..... reales vellón conforme en un todo con el pliego de condiciones formulado para este objeto, en virtud del cual ha entregado en la Caja de depósitos de esta provincia la fianza de..... que previene la instrucción segun lo acredita el recibo adjunto.

Fecha y firma.

Pliego de condiciones para la subasta de arriendo del Portazgo de Laza, perteneciente á los estados secuestrados del Conde de Monterrey.

1.^o El remate se celebrará el dia y hora que se cita, el cual será doble y simultáneo en esta capital y en la casa consistorial del Ayuntamiento de Laza, quedando pendiente de aprobación de la Dirección general.

2.^o No se admitirá postura menor que la que marcan los anuncios, debiendo acompañar al pliego de proposición el recibo de la Caja de depósitos del 10 por 100 en concepto de fianza, y haciendo postura ante el Alcalde de Laza, en la Administración del partido de Verín á donde corresponde dicho Portazgo.

3.^o El arrendatario satisfará por trimestres vencidos el importe del arriendo, y prestará la correspondiente fianza á satisfacción del Administrador principal.

4.^o El arriendo se entiende por tres años, que principiarán á contarse desde el dia de la aprobación.

5.^o No se admitirán posturas á ninguno que sea deudor á los fondos del Estado.

6.^o El arrendatario no tendrá derecho para pedir perdón ó rebaja, ni solicitar pagar en otros plazos que los estipulados; el contrato ha de ser á suerte y ventura sin opción á ser indemnizado por ningún acontecimiento imprevisto.

7.^o Si no cumpliese la obligación de pago en los términos contratados, quedará sujeto á la acción que contra él intente la Administración, y á satisfacer los daños y perjuicios á que diere lugar.

8.^o Satisfará de su cuenta y riesgo en la Administración principal de propiedades, y en moneda de oro y plata, el importe del arriendo en los plazos marcados.

9.^o No sufrirá otros desembolsos que el pago de los derechos al escrivano, fiel de fechos y pregones, y del papel que se invierta en el expediente y escritura.

10. No podrá exigir de los transeuntes mas derechos que los que figuran en la tarifa indicada.

11. Si transcurridos ocho días después que se comunique al arrendatario

la aprobación del contrato, no hubiese realizado el primer trimestre según la cantidad en que consta el arriendo, perderá desde luego la cantidad que tenga depositada, y además quedará responsable al resultado de la nueva subasta en quiebra.

12. El importe del arriendo deberá satisfacerse precisamente con arreglo á la condición 5.

13. Además de las condiciones expresadas, el arrendatario quedará sujeto á las que particularmente se hallan establecidas por las leyes y adoptadas por la costumbre del país; siempre que no se opongan á las contenidas en este pliego.

Orense 15 de octubre de 1858.—P. O. El oficial interventor, *Manuel García*.

INTERVENCION MILITAR DE GALICIA.

Pliego de condiciones bajo el cual deberá procederse á la venta en pública licitación el dia 30 de octubre próximo, de los efectos que se expresarán:

1.º La adjudicación se hará al mas beneficioso postor siempre que merezca la aprobación del Excmo. Sr. Director general del cuerpo administrativo del ejército, manifestando por escrito la cantidad que ofrece por cada uno de los euseros siguientes:

Seis mesas de escritorio inútiles.

Tres sillones con brazos idem.

Tres sillones sin ellos idem.

Seis almohadones idem.

2.º En caso de haber dos proposiciones iguales y que sean las mas beneficiosas, los postores podrán seguidamente y de palabra mejorarlas, quedando dichos efectos á favor del que ofrezca mayor suma por cada uno de ellos.

3.º Se podrán admitir posturas, si conviniese, solo para adquirir los de una ú otra clase.

4.º La persona ó personas á cuyo favor quede el remate, recibirán dichos efectos, siendo de su cuenta la conducción al punto que les acomode.

5.º A las veinticuatro horas de haber dado conocimiento al rematante ó rematantes de dicha aprobación ha de retirar precisamente los efectos, entregando antes de llevárselos la cantidad en que fueron subastados á la persona que se le marque en esta plaza.

6.º Los que se interesen en el remate, presentarán en el acto persona á satisfacción de la Administración militar, que responda del cumplimiento de su proposición, firmando á continuación con el requisito expresado.

Coruña 30 de setiembre de 1858.—P. A., el Oficial 1.º, *Juan Luis Taja*.—Es copia.—G. Autrán.

mismo, á defenderse en la causa que estoy instruyendo por lesiones graves inferidas á Tomás Arias, de dicho Moreda, que produjeron su muerte; en la inteligencia de que no verificándolo se sustanciará en su rebeldía y las diligencias á él concernientes se entenderán con los estrados de la Audiencia de este juzgado, parándole el perjuicio que haya lugar. Al mismo tiempo en nombre de S. M. (q. D. g.), exhorto y requiero á los señores Gobernadores de las cuatro provincias y demás autoridades así civiles como militares se sirvan dar las órdenes que su acreditado celo les sugiera para la captura del Juan Mosquera, y su inmediata remisión á este juzgado con la debida seguridad, á cuyo efecto se expresan sus señas á continuación. Dado en Monforte á 7 de octubre de 1858.—Miguel Salgado Membiela.—De su mandado, Ramón Somoza.

Señas de Juan Mosquera.

Estatura 5 pies y 2 pulgadas, edad 21 años, cara redonda, color trigueño, barbillampiño, ojos castaños, pelo idem oscuro, nariz regular; viste pantalón de paño pardo-monte, chaqueta de idem castaño claro de bejar; chaleco de tela casiana rayada, sombrero de paño negro con copa baja y ala regular, y calza zapatos de becerrillo de dos suelas.

Juzgado 3.º de paz de Ribadavia.

En juicio verbal celebrado en este juzgado á instancia de D. José Fernández Pastor con D. José Montero y Bentín en rebeldía, recayó la providencia que dice:

En Ribadavia á 1.º de octubre de 1858, el Señor D. Benito Moure, juez de paz tercero en esta villa y su distrito municipal por antemano secretario dijo; visto el anterior juicio;

Resultando que D. José Fernández Pastor Comandante graduado, Teniente de Infantería retirado, vecino de la parroquia de San Payo en este distrito, reclama á D. José Montero y Bentín, vecino de San Lorenzo da Peña distrito municipal de Cenlle, 512 rs. que por él satisfizo en el comercio del Sr. D. Antonio Félix Pérez Bobo de la ciudad de Orense, procedentes de géneros sacados al fisco por el Montero y Bentín, bajo la garantía del demandante que se constituyó principal pagador.

Resultando que por la no comparecencia del demandado se sustanció en rebeldía, previa declaración de tal:

Resultando que la autora, como medio de prueba, presentó un recibo expedido á su favor por D. Feliciano P. T. Bobo, hijo y apoderado del D. Antonio Félix, según el cual aparecen satisfechos los 512 rs. por el D. José Fernández Pastor.

Resultando que habiéndose solicitado exhorto cometido al juez de paz de Cenlle para que el demandado prestase juramento indicatorio y bajo él declarase á tenor de los particulares de la demanda; practicada aquella diligencia, el D. José Montero y Bentín contestó evasivamente, no obstante los apercibimientos comprendidos en los artículos 295 y 297 del Código de procedimientos civiles, por lo cual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 298, se declaró confeso respecto á haber contraído el adeudo:

Resultando que, habiéndose dirigido exhorto al juez de paz de Orense, fue reconocido el recibo por el Sr. D. Feliciano P. T. Bobo, que lo expidió como hijo y apoderado de su Sr. padre el D. Antonio Félix:

Resultando que la autora propuso la demanda en este juzgado, fundada en que cuando el demandado contrajo el adeudo era vecino de este distrito, además de que en él tiene que cumplimentar la obligación de la paga:

Considerando que las evasivas de Don José Montero y Bentín no lo eximen de la responsabilidad de satisfacer el crédito

que se le reclama por el hecho de no haberse presentado á contradecir la demanda ni excepcionar cosa alguna en medida de haber sido citado en persona:

Considerando justificados plenamente los extremos de la demanda propuesta por D. José Fernández Pastor;

Por todo ello salía: que declarando como declara con derecho á D. José Fernández Pastor al cobro de los 512 reales reclamados, debe condenar y condena á D. José Montero y Bentín á que con las costas se los satisfaga dentro de tercero dia.

Y por esta su sentencia, que respecto al demandado se utilizará conforme á lo prescrito en los artículos 1.182, 1.183, y 1.190, del citado Código, así lo pronunció, mandó y firmará de que yo secretario certifico. Ribadavia octubre 2 de 1858.—Benito Moure.—Roque Pérez, secretario.

ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA
de Lugo.

En virtud de orden superior se saca á pública subasta el arrendamiento total de los derechos de las especies de consumo de la villa de Rivadeo y su término municipal, correspondientes á los años inmediatos de 1859, 60 y 61.

Dicha subasta tendrá lugar simultáneamente en el despacho del Sr. Gobernador de la provincia bajo su presidencia y en unión del que suscribe, Oficial primero de Hacienda el dia 28 del actual mes, y de once á las doce del dia, y ante el Administrador de Aduanas de dicha villa, acompañado del Contador de aquella oficina y de Escrivano público.

Las proposiciones se harán en pliegos cerrados previo el depósito del 2 por 100 del tipo del arriendo en la caja sucursal; y al dar la hora dicha de doce, se procederá á la apertura de los que se hubieran presentado sin que después pueda admitirse ninguna, sea cualesquiera las ventas que por ella se ofrezcan.

Constará de un solo remate, siendo admisibles todas las proposiciones que cubran la cantidad de 75.000 rs. señalados por base, cuyo es el producto líquido calculado de los derechos que deben adeudar en cada uno de los tres años expresados, las especies de la tarifa núm. 1.º unida al Real decreto de 15 de diciembre de 1856, primera y segunda clase de población á que pertenece el Ayuntamiento de Rivadeo, según la clasificación practicada en cada una de ellas por esta Administración principal, como resulta del correspondiente presupuesto y sujetándose á las condiciones del pliego inserto en el Boletín oficial de la provincia del dia 6 del corriente mes núm. 120.

Las proposiciones se arreglarán en su redacción al formulario que es copia, y en el concepto de que será nula la que modifique ó altere la sustancial del mismo.

Lugo 7 de octubre de 1858.—Luis Romero.

Modelo de proposición.

Don F. de T. . . . vecino de tal parte, enterado del anuncio para la subasta de los derechos de consumos de la villa de Rivadeo y su término municipal, hace proposición bajo las condiciones del pliego publicado y demás de la Instrucción, previo el depósito del 2 por 100 cuya carta de pago es adjunta, en la cantidad de (tantos reales en letra) para los años próximos de 1859, 60 y 61 y por solo los derechos del Tesoro, obligándose á entregar la parte proporcional por los arbitrios que haya impuestos ó puedan imponerse á lo sucesivo.

(Fecha y firma del licitador.)

INTENDENCIA MILITAR DE GALICIA.

El Intendente de Ejército graduado efectivo de división y del distrito militar de Galicia.—Hace saber: que debiendo procederse á la construcción de 6 mesas de escritorio, 3 sillones con brazos, 3 sillas sin ellos y 6 almohadones, todo para el servicio de las oficinas de Administración militar de este distrito, se convoca por el presente á los que gusten interesarse en la contrata de dichos efectos; en la inteligencia de que el remate deberá tener efecto a la una de la tarde del dia 30 de octubre próximo con arreglo al pliego de condiciones que se inserta á continuación. Coruña 30 de setiembre de 1858.—Pedro González Autrán.—El secretario interino, *Eduardo de Pico y Bolaño*.

INTERVENCION MILITAR DE GALICIA.

Pliego de condiciones bajo los que se subasta la construcción de 6 mesas de escritorio, 3 sillones con brazos, 3 sillas sin ellos, y 6 almohadones, todo para el servicio de estas oficinas.

1.º Será obligación del rematante la construcción de 6 mesas de escritorio, madera de nogal que tengan las placas y cajones con sus llaves, como la que se pondrá de manifiesto, forrada de hule.

La de 3 sillones de cerezo, con sus correspondientes brazos, barnizados.

La de 3 sillas sin brazos, también de cerezo; y la de 6 almohadones, rechinados de cerda.

2.º Los referidos efectos cuando se entreguen, serán reconocidos en forma; y si no fueren de recibo, tendrá obligación el contratista de construir otros.

3.º El pago se verificará en el acto que entregue el contratista los efectos de que se trata.

4.º Los proposiciones se presentarán media hora antes de la subasta, y no tendrá efecto si no estuviesen garantidas cada una.

5.º El contrato no será válido hasta que merezca la aprobación del Excmo. Señor Director general de Administración militar.

Coruña 30 de setiembre de 1858.—P. A., El Oficial 1.º *Juan Luis Taja*.—Es copia.—G. Autrán.

El Intendente de Ejército graduado efectivo de división y del distrito militar de Galicia.—Hace saber: que debiendo procederse á la venta en pública subasta de

Seis mesas de escritorio inútiles.

Tres sillones con brazos idem.

Tres sillas sin ellos idem.

Seis almohadones idem idem.

Se convoca por el presente á los que gusten interesarse en dicha licitación, en el concepto de que el remate tendrá efecto á las doce del dia 30 de octubre próximo en los estrados de esta Intendencia militar con arreglo al pliego de condiciones que se inserta á continuación.

Coruña 30 de setiembre de 1858.—Pedro González Autrán.—El Secretario interino, *Eduardo de Pico y Bolaño*.

Idem de Monforte.

Don Miguel Salgado Membiela, juez de primera instancia de la villa y partido de Monforte.—Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan Mosquera (a) Petapouco, natural y vecino de la parroquia de San Salvador de Moreda en este partido, para que dentro del término de treinta días se presente en la cárcel pública del

demanda en este juzgado, fundada en que cuando el demandado contrajo el adeudo era vecino de este distrito, además de que en él tiene que cumplimentar la obligación de la paga:

Considerando que las evasivas de Don José Montero y Bentín no lo eximen de la responsabilidad de satisfacer el crédito